

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, abril trece (13) de dos mil veintitrés (2023).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario radicado con el número 05266310500120140021501, promovido por el señor **RIGOBERTO FRANCO MUÑOZ** en contra de **URBANIZACIÓN SAN SEBASTIÁN P.H.**, y los señores **MARÍA IDALY TANGARIFE ÁLZATE**, **ALBA LUCÍA BALBÍN MAYA**, **JAIME QUINTERO YEPES**, **LÍA DE JESÚS GALVIS CALLEJAS**, **LÍA BIBIANA MUÑERA GALVIS**, **NORMAN BALCÁZAR MORALES**, **SARA MARÍA ROBLEDO RESTREPO**, **LEÓN DARÍO GARCÉS GAVIRÍA**, **LUIS FERNANDO OCHOA GÓMEZ**, **CLAUDIA CLARA OLARTE SALDARRIAGA**, **DAVID RODRÍGUEZ RESTREPO**, **MARÍA CRISTINA ISAZA DE VIVES** Y **PABLO VIVES MEJÍA**, con la finalidad de resolver el recurso de

apelación interpuesto en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado el tres (3) de febrero del año dos mil diecisiete (2017).

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...” se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **089**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

El demandante, instauró acción judicial, pretendiendo, la existencia de una relación laboral, entre el 9 de febrero de 1998 y el 30 de abril de 2013, que se ordene el pago del tiempo suplementario correspondiente a los recargos nocturnos, horas extras diurnas y horas extras nocturnas, trabajo supletorio y que este se tenga en cuenta para la reliquidación de los conceptos prestacionales, cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicio, vacaciones, aportes en seguridad social y parafiscalidad. Igualmente se declare que se le realizó una retención no autorizada de \$5.000 y la devolución de dicha suma. Solicitó igualmente la sanción moratoria del art 65 del CST y del artículo 99 de la ley 50 de 1990, la indexación de las condenas.

Como fundamento de sus pretensiones se expuso, que, se vinculó laboralmente al servicio de la Urbanización San Sebastián P.H. mediante contrato a término

indefinido en el cargo de portero residente desde el 9 de febrero de 1998 hasta el 30 de abril del año 2013 fecha en la que fue despedido. Narró que desempeñó las funciones que le fueron encomendadas y notificadas mediante diferentes comunicaciones, donde, además, se le indicó que su horario de trabajo era de 5:30 am hasta las 9:00 p.m., incluso se le informó que, en atención a habitar el lugar de trabajo, no tenía derecho a trabajo suplementario ni tampoco recargo nocturno. Expuso que el 14 de mayo del año 2007 se le modificaron las funciones a desempeñar que incluía la colaboración a los residentes. Comentó que sumado a la remuneración salarial monetaria, recibía salario en especie de \$10.000 correspondiente a la vivienda de acuerdo a cláusula sexta del contrato de trabajo, valor que nunca se tuvo en cuenta en la liquidación de prestaciones sociales. Pese a lo narrado con antelación, se le descontó mensualmente la suma de \$5.000 por concepto de “arrendamiento de vivienda”. Estimó que se le adeuda durante toda la relación laboral 2.384.5 horas con recargo nocturno en suma de \$1.546.179, 31.180.5 horas extras diurnas por valor de \$70.390.770 y 4.587 horas extras nocturnas en suma de \$6.122.477 de acuerdo a cuadro de liquidación que incorporó en el escrito de demanda, y consecuente a ello, la reliquidación de los conceptos laborales.

Admitida la demanda, se dio respuesta a la demanda por las pasivas así:

Los accionados Urbanización San Sebastián PH, María Idaly Tangarife, Lía de Jesús Galvis, Lía Bibiana Múnera, Norman Balcázar, Sara Robledo y León Jairo Garcés, enunciaron que es cierta la relación laboral con la Urbanización pero que el actor no prestó el servicio todos los días de la semana, pues en muchas situaciones solicitó permisos y licencias no remuneradas, incluso su hijo Sneider Franco Zapata lo reemplazó así como su esposa Marta Ligia Zapata, y contrario a

lo que se indicó en el líbelo gestor, sostienen que el actor no cumplió con las funciones que le fueron encomendadas. Explicaron que el contrato de trabajo en su texto escrito tiene varias imprecisiones respecto al lugar de prestación del servicio, solicitando se revise la realidad sobre las formas que se indican en el pliego contractual. Comentaron que el actor vivía en la portería con su familia, no siendo posible que ejecutara las funciones durante toda la noche o durante todo el día. Negaron la indicación de actividades de reparación, pues estas se contrataban con terceros, también que los residentes pudieran darle órdenes e informaron que cada propietario manejaba control para abrir o cerrar sin que fuere necesaria la ayuda del actor. Aceptaron que se le reconoció siempre el subsidio de transporte pese a vivir en el lugar donde laboraba. Explicaron que inicialmente se valoró la suma de \$10.000 como arrendamiento de vivienda, la que se le deduciría por quincenas en valor de \$5.000 que fue autorizado de manera verbal por el trabajador. Explicaron que el demandante no cumplía horario, sino que, tenía una disponibilidad en las que podía cumplir o no sus funciones, y les generó reparo la solicitud de reconocimiento de recargos en tiempos en los que se encontraba en vacaciones. Se opusieron a la prosperidad de las pretensiones e interpusieron las excepciones que nombraron: “Prescripción”, “Compensación”, “Pago”, “Inexistencia de la obligación”, “Buena fe”, “Mala fe del demandante”, “Falta de causa para pedir”, “Indebida acumulación de pretensiones”.

Por su parte, la demandada Sara María Robledo Restrepo contestó que no le consta lo indicado en la demanda, pero que la unidad es pequeña, solo consta de 9 casas, y recae en el demandante probar las funciones que desempeñó, sumado a ello, al vivir en la portería de la urbanización lo apenas lógico era que mantuviera aseado el lugar en el que vivía. Arguyó que no es cierto lo del horario, pues los propietarios abrían la puerta y recibían domicilios, lo que el demandante tenía era una

disponibilidad por vivir allí, por lo que tenía un salario básico superior al mínimo, incluso en varios periodos su cónyuge e hijos le reemplazaron en el servicio. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones e interpuso las excepciones que denominó: “Prescripción”, “Compensación”, “Pago”, “Inexistencia de la obligación”, “Buena fe”, “Mala fe del demandante”, “Falta de causa para pedir”, “Indebida acumulación de pretensiones”, “Falta de legitimación en la causa por pasiva”.

Los señores María Cristina Isaza de Vives y Pablo Vives Mejía, negaron los hechos enunciados en la demanda, y expusieron que el actor sólo tenía una disponibilidad por habitar el lugar y no horario, que los residentes y propietarios no lo contrataron ni le daban órdenes, sumado a ello las casas por lo general permanecían solas pues sus ocupantes se encuentran por fuera trabajando. Desconocieron las cláusulas del contrato que se enuncian y se opusieron a las pretensiones invocadas interponiendo las excepciones de: “Compensación”, “Pago”, “Inexistencia de la obligación”, “Buena Fe”, “Mala fe”, “Mala fe del demandante”, “Falta de causa para pedir”, “Indebida acumulación de pretensiones”, “Falta de legitimación en la causa por pasiva”.

La señora Claudia Clara Olarte Saldarriaga contestó que desconoce los términos del contrato, no le constan las afirmaciones del demandante, y negó la existencia del horario que se indica, pues sólo tenía una disponibilidad en razón a la habitación de un lugar allí por lo que se le pagaba un salario básico superior al mínimo legal. Solicitó la absolución de las pretensiones y la declaratoria de las excepciones de: “Prescripción”, “Compensación”, “Pago”, “Inexistencia de la obligación”, “Buena Fe”, “Mala fe del demandante”, “Falta de causa para pedir”,

“Indebida acumulación de pretensiones”, “Falta de legitimación en la causa por pasiva”.

El señor David Rodríguez Restrepo dio respuesta en idéntico sentido a la señora Olarte Saldarriaga, con los mismos medios exceptivos.

Luis Fernando Ochoa Gómez expuso, que no le constan los hechos narrados, pues vive fuera del país, negó los horarios descritos en la demanda y expuso que no se beneficiaba de los servicios del demandante, quien además vivía con la familia allí con un canon de arrendamiento de \$10.000. Presentó las excepciones de: “Prescripción”, “Compensación”, “Pago”, “Inexistencia de la obligación”, “Buena Fe”, “Mala fe del demandante”, “Falta de causa para pedir”, “Indebida acumulación de pretensiones”.

Respecto a la Alba Lucía Balbín y Jaime Quintero Yepes, se contestó la demanda mediante curador ad litem de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 del CPT, indicando, que ser cierta la existencia de la relación laboral, más se atiene a lo manifestado en la documental por no constarle lo narrado en el libelo gestor, que deberá ser objeto de prueba en el proceso. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones e interpuso la excepción de “inexistencia de la obligación”.

En **sentencia** proferida el tres (3) de febrero del año dos mil diecisiete (2017) el Juzgado Laboral de Envigado, absolvió a las pasivas de todas las pretensiones invocadas en su contra y condenó al demandante en costas del proceso, fundamentado en la ausencia de material probatorio que diera fe de lo pretendido conforme los lineamientos de la Sala Laboral.

RECURSO INTERPUESTO

El procurador judicial de la parte demandante, interpuso el recurso de alzada, indicando que con el documento que reposa en folio 141 del expediente quedó plenamente demostrado que para el 21 de julio del año 2001 se le otorgó al demandante un horario de 5:30 a.m. a 9:00 p.m., al igual que la documental que da cuenta de las funciones que se tienen que realizar en ese interregno de tiempo. Preciso que el demandante era el encargado de recoger la basura, repartir la leche, lavar carros, limpiar canoas de los techos, labores de las cuales se beneficiaban de manera directa los residentes y si bien los testigos de la parte demandante no pueden constatar todos los días el horario, si fueron coherentes en informar que cada vez que pasaban a las 5:00 a.m. lo veían haciendo las mismas actividades que a las 9:00 pm, incluso, con la prueba documental quedaba clara tal situación.

Respecto a la solidaridad indicó, que los copropietarios se beneficiaron del servicio prestado, pues ayudaba a hacer reparaciones locativas, llevaba mercados, colaboraba con las matas, limpiaba las canoas, las fachadas de las casas, repartía la leche, con lo que se ve que de manera directa y real se beneficiaban de labor del demandante, solicitando revocar la sentencia y condenar a todas las pretensiones de manera conjunta y solidaria.

Corrido el traslado para alegar, las partes no hicieron manifestación alguna.

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico de esta instancia, de acuerdo al recurso interpuesto por la parte actora, consiste en determinar si el demandante laboró o no tiempo extra,

suplementario o nocturno que dé pie a su pago, así como a la reliquidación de los conceptos laborales y a las cotizaciones en pensión respectivas. De ser así, la solidaridad o no de los codemandados como beneficiarios de los servicios del actor.

CONSIDERACIONES

El artículo 164 del Código General del Proceso establece que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Por su parte, el artículo 167 ibidem, consagra el principio de la carga de la prueba que se explica afirmando que al actor le corresponde demostrar los supuestos fácticos en los cuales funda su pretensión y al demandado los hechos en que finca la excepción.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre el principio universal de la carga probatoria, y ha explicado con claridad, que quien afirma una cosa está obligado a probarla. Es así pues, como quien pretende o demanda un derecho debe alegarlo, y adicionalmente, debe demostrar los hechos que lo gestan o aquellos en que se funda, desplazándose la carga de la prueba al demandado cuando éste se opone o excepciona aduciendo en su defensa hechos que requieren igualmente de su comprobación, debiendo desvirtuar la prueba que el actor haya aportado como soporte de los supuestos fácticos propios de la tutela jurídica efectiva del derecho reclamado. (Sentencia de 5 de agosto de 2009, Expediente 36.549).

En voces de la Corte (CSJ SL, 22 abril 2004, rad. 21779) se explicó así:

«De antaño se ha considerado como principio universal en cuestión de la carga probatoria, que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, obligando a quien pretende o demanda un derecho, que lo alegue y demuestre los hechos que lo gestan o aquellos en que se funda, desplazándose la carga de la prueba a la parte contraria cuando se opone o excepciona aduciendo en su defensa hechos que requieren igualmente de su comprobación, debiendo desvirtuar la prueba que el actor haya aportado como soporte de los supuestos fácticos propios de la tutela jurídica efectiva del derecho reclamado»

La parte demandante no puede limitarse a enunciar lo pretendido, solicitando se active el principio de la carga dinámica de la prueba, pues ello sucede de acuerdo a la particularidad de cada proceso, en los que, ante la dificultad de la prueba, es posible la inversión de dicha carga a favor del extremo activo, imponiendo a cualquiera de las partes la prueba de los supuestos que amparen los fundamentos fácticos enunciados. A pesar de ello, no se deja de lado que en un principio es la demandante y no otra, quien sobre sus hombros debe traer al proceso los elementos probatorios que, calificados en conjunto por el fallador, arriben a la concesión de sus pretensiones, para que, de ser el caso, su contra parte, si posee mejores condiciones de producir la prueba o la tiene a su alcance, entre a probar, debatir o desvirtuar de manera contundente el hecho afirmado.

En el caso de autos se encuentra debidamente probada la existencia de la relación laboral entre el señor Rigoberto Franco Muñoz y Urbanización San Sebastián P.H. en los extremos indicados en el escrito gestor.

Para ello debe recordarse que el trabajo suplementario, aquel que se efectúa por fuera de la jornada laboral ordinaria y habrá lugar al pago con apego al recargo que corresponda según el tipo de hora extra de la que se trate, sin embargo, si su

reconocimiento se pretende vía judicial, el demandante deberá demostrar **claramente** que prestó el servicio por fuera de la jornada ordinaria, pues bajo ningún caso se podrá realizar interpretaciones análogas en el caso.

Al respecto en línea jurisprudencial venida desde la sentencia SL9318 de 2016, la H. Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia indicó que:

“si el actor aspiraba a obtener en un juicio laboral, por ejemplo el pago de horas extras, dominicales y festivos y, por ende, el reajuste de sus prestaciones sociales, era menester asumir la carga procesal de indicar, en forma diáfana y cristalina, las razones y soportes de su inconformidad. Las súplicas generales o abstractas, a no dudarlo, lesionan frontalmente los derechos de defensa y contradicción, ya que ponen a la contraparte en la imposibilidad de asumir una oposición congruente frente a lo que se implora.

Aquí, es importante recordar, que para que el juez produzca condena por horas extras, dominicales o festivos las comprobaciones sobre el trabajo más allá de la jornada ordinaria han de analizarse de tal manera que en el ánimo del juzgador no dejen duda alguna acerca de su ocurrencia, es decir, que el haz probatorio sobre el que recae tiene que ser de una definitiva claridad y precisión que no le es dable al juzgador hacer cálculos o suposiciones acomodaticias para determinar el número probable de las que estimen trabajadas.”
(SL9318 de 2016)

En igual sentido, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL 1225 de 2019 precisó que:

Así pues, esta corporación ha señalado que para que se condene al pago de horas extras y trabajo suplementario debe probar el número de horas diarias laboradas, así como el de los

dominicales y festivos, las mismas deben ser probadas por quien pretende su pago, es decir, deben encontrarse plenamente acreditados los siguientes supuestos:

(a) La permanencia del trabajador en su labor, durante horas que exceden la jornada pactada o la legal.

(b) La cantidad de horas extras laboradas debe ser determinada con exactitud en la fecha de su causación, pues no le es dable al fallador establecerlas con base en suposiciones o conjeturas.

(c) Las horas extras deben ser ordenadas o por lo menos consentidas tácitamente por el empleador y, en ese sentido, deben estar dedicados a las labores propias del trabajo, y no cualquier otro tipo de actividades.

En el transcurso del tiempo no ha cambiado la posición sobre **la acreditación en este tipo de procesos, en el cual la carga probatoria debe ser definitiva, clara, precisa.**

Es claro que el señor Rigoberto Franco Muñoz desempeñaba sus funciones en el mismo lugar que habitaba, pues contaba con un apartamento en la portería para compartir con su familia, situación, que evidentemente traducía en su estancia permanente en la urbanización, aún, por fuera del tiempo que empeñaba en el desarrollo de sus labores.

Se indicó en el recurso de alzada que la prueba documental es suficiente para determinar los tiempos laborados por el actor, para lo cual, la Sala realizará un estudio de dichos materiales probatorios.

En el documento allegado como contrato de trabajo, se refiere a un contrato de “MAYORDOMO”. En este tipo de actividad, debe hacerse referencia al literal c) del artículo 162 del C. S. del T, a la cual no le es aplicable el concepto de jornada máxima legal de trabajo; pues dice dicha norma:

“Artículo 162. Quedan excluidos de la regulación sobre jornada máxima legal de trabajo los siguientes trabajadores:

a) Los que desempeñan cargos de dirección, de confianza o de manejo

b) Los del servicio doméstico, ya se trate de labores en los centros urbanos o en el campo.^[9]

c) Los que ejerciten actividades discontinuas o intermitentes y los de simple vigilancia, cuando residen en el lugar o sitio de trabajo.

La simple vigilancia o custodia, como en el caso de la mayordomía (más asimilable a conserjería), contrato inicial del demandante para el 9 de febrero del año 1998 y en el cual se indica que será también **“portero residente”** es una actividad que pertenece a la estática de la producción, es decir, no consiste en sucesivos actos, sino en una actitud pasiva con fines de seguridad material, que no por eso deja de considerarse trabajo y que se caracteriza por desarrollarse en el mismo lugar de habitación.

Por ende, la ley lo exceptúa de la jornada máxima legal, que corresponde al número máximo de horas diarias laborables que se pueden pactar trabajador y patrono, dado que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158 del Código

Sustantivo del Trabajo, son los extremos contractuales los que acuerdan la jornada ordinaria de trabajo, y sólo a falta de expresa disposición sobre el particular se aplicará la jornada máxima legal como lo dijo la Corte Suprema de Justicia en Sentencia 11.014, 1999:

“...la jornada ordinaria de trabajo es la que convienen las partes, que es distinta de la máxima legal, que opera en ausencia de tal convención, de manera que cuando el empleador exige la prestación de servicios a continuación de la jornada ordinaria convenida está disponiendo un trabajo suplementario de acuerdo con el artículo 159 del mismo estatuto.”.

Es decir, no puede indicarse que pasó más tiempo de la jornada diaria permitida en su lugar de trabajo, pues vive, esto es habita en él.

Esta situación es coherente con el documento a folio 179, donde se le indica que la apertura de puertas puede determinarse en ese horario de 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., pero en la misma misiva no se indica que todo el tiempo **debe hacerlo o estar en vilo hasta esa hora, por el contrario, se dan un compilado de funciones que pueden ocurrir o no, verbigracia, el ingreso de residentes con paquetes puede darse o no, máxime cuando siendo una urbanización de nueve casas, no hay un flujo constante de personas al ingreso.**

Para la Sala, la antes citada comunicación no es suficiente para acreditar el trabajo suplementario, sino que debe demostrarse que efectivamente el servicio se prestó continuamente durante la citada intensidad horaria.

En esa carta es importante recalcar que se resalta por parte de la administración que en su tiempo libre puede realizar trabajos internos, que serían cancelados por cada residente, es decir, el trabajador tenía libertad para pactar, en la misma unidad, ciertas actividades cuyo pago era adicional y sufragado por persona diferente a su empleador, documento pues, que por sí solo, no trae la certeza que reclama el recurrente.

Para el año 2007 de acuerdo a escrito folios 180 a 181, se insisten la calidad de mayordomo del actor y se imparten funciones generales, podar, regar, abonar, abrir la puerta cuando no hay corriente eléctrica, y apoyar a los residentes con sus paquetes entre otros, momento para el cual, continuaba el demandante y su familia viviendo en la urbanización, lo que no necesariamente devenía en un trabajo continuo, ni tampoco que toda actividad fuere en procura de su contrato laboral, sino que, ante la coexistencia de su lugar de funciones con el lugar de habitación, era natural que estuviera todo el tiempo allí, bien laborando o descansando, y es entonces en ese momento en que la prueba testimonial resulta inconducente para el objeto probatorio, pues no da certeza, firmeza ni claridad sobre el detalle del tiempo que se alega, requerimientos probatorios dados por el máximo órgano de cierre.

En la copiosa prueba documental aportada por el actor a folios 190 a 415, se observan periodos en los que, la empleadora pagó recargo dominical y festivo, y efectuó la cotización correspondiente en pensión con el pago al que ello corresponde, discriminado por horas el recargo al que hubo lugar, pues basta con mirar la historia laboral en su detalle de pagos dado por Colpensiones para colegir que los IBC de cada mes son disímiles así como los pagos por dominicales y festivos cancelados desde el marzo de 1998 (folio 190) a 31 de

marzo del año 2013, último salario en el cual se pagó trabajo festivo, que, no necesariamente dan un patrón determinado, pues en sentencia SL8675 de 2017 se explicó:

“No es posible, sin embargo, como lo plantea, que deba ser tenido en cuenta el patrón de horas extras y contabilizar por todo el tiempo de servicio el número máximo de horas permitido por la ley, pues no se trata de una presunción, sino que ello debe ser resultado de demostración una a una, de forma que solo se podrá declarar la causación en los días aquí acreditados.”

Contrario a lo expuesto en la demanda si quedó claro en la foliatura conforme a los documentos de folios 608 a 624, que para prestar el servicio de arreglos dentro de la unidad se contrataba a terceros, como mantenimiento de puertas, chapas, tubos, elementos de seguridad, con lo que se infiere que al demandante no se le imputaba la generalidad de dichas labores.

Además de ello, mediante acta de conciliación aportada a folios 635 a 636 del expediente, se constata que la señora Martha Ligia Zapata González acudió ante el Ministerio de la Protección Social para que, mediara en asunto laboral con Urbanización San Sebastián P.H. por el pago de prestaciones sociales, salarios y demás en su labor de **portería y oficios varios los días domingos desde el 21 de septiembre de 2002 al 3 de julio del año 2011** fecha en que fue despedida, siendo suficiente prueba que por lo menos en dichos años el actor **no laboró de manera constata las horas que expone en la demanda ni tampoco los dominicales y festivos que enuncia.**

No está de más recordar ha reiterado la Sala, en relación con la exigibilidad de las

horas extras (CSJ SL8675-2017) que:

La retribución que se debe al trabajador por servicios extras, o sea los que se prestan fuera de la jornada legal, constituye salario conforme el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo.- El pago de trabajo suplementario o de horas extras debe efectuarse junto con el salario ordinario del periodo en que se han causado o, a más tardar, con el salario del periodo siguiente, conforme al artículo 134 ibidem; por consiguiente desde el vencimiento de estos periodos fijados por la ley para el pago del trabajo suplementario, se hace exigible la respectiva obligación y, desde el momento de su exigibilidad empieza a contarse el término de prescripción de las acciones que se intenten para obtener el reconocimiento y pago de esos derechos. Sobre el particular el antiguo Tribunal Supremo del Trabajo, en sentencia de 17 de junio de 1947 que corre publicada en la Gaceta del Trabajo Tomo II, folio 194, ratificada en fallos posteriores, dijo: El término prescriptivo de las horas extras empieza a contarse a partir en la fecha en que ellas se causan y no de la extinción del contrato de trabajo. (Decisión de 27 de noviembre de 1959, Gaceta 2217 a 2219, folio 1131 y ss).

Es así pues que en el convencimiento judicial no quedó acreditadas las pretensiones del demandante, pues la carga de la prueba para estos asuntos no fue cumplida.

Se confirmará por estas razones la sentencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado, el tres (3) de febrero del año dos mil diecisiete (2017).

Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante ante la desventura de su recurso de alzada en la suma de \$1.160.000.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante ante la desventura de su recurso de alzada en la suma de \$1.160.000.

Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **9d68235f788881d94c73c37d0116be6a63e076da9faa01d8166292663c63c76b**

Documento generado en 13/04/2023 02:10:42 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>